

ponsable al C. Juez de 1ª instancia de la Capital de dicho Estado por haber declarado concursados los bienes del difunto esposo de la promovente, D. Narciso Saenz. Vistas las pruebas aducidas; el informe de la autoridad responsable; lo alegado por la solicitante; el parecer fiscal y el fallo del Juez de Distrito:

Considerando: que el Juez de 1ª instancia de la Ciudad de San Juan Bautista, de Tabasco, ha procedido en todo en la órbita legal de sus facultades y que en manera alguna se oponen á la Constitución federal; por lo cual, en ningún caso puede decirse que en la secuela del juicio de concurso á bienes á que legítimamente ha conocido, haya la violación de garantías que indica la solicitante, se declara: que se confirma la sentencia del inferior que negó el amparo á la Sra. Dª Amada Ponce de Saenz representada por el C. Nabor Hernandez.

Devuélvanse los autos al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos, y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José María Lozano.*—*Ignacio Ramirez.*—*Manuel de Castañeda y Nájera.*—*M. Auza.*—*Simon Guzman.*—*Luis Velasquez.*—*José García Ramirez.*—*Enrique Landá,* secretario.

Es copia que certifico. México, 12 de Febrero de 1874.—*Lic. Emilio Ordaz,* fiscal mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito del Estado de Morelos por la Sra. Dª Petra Escobar, contra la Gefatura política de Cuernavaca, por violación de la garantía que otorga el artículo 16 de la Constitución general de la República.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que Doña Petra Escobar presentó escrito á este Juzgado, diciéndole: que posee hace mas de nueve años unos terrenos de repartimiento en el pueblo de Tlaltenango, y teniendo noticia de que Eugenio Hernandez los habia pedido en adjudicación, ocurrió á la Gefatura política oponiéndose á tal pretension, pues conforme á la circular de 9 de Octubre de 1856 y al decreto del Estado de México de 20 de Octubre de 1868, la adjudicación de esos terrenos debe hacerse precisamente á sus poseedores; pero que contraviniendo esas prevenciones, el C. Gefe político ha mandado extender el título de adjudicación en favor de Hernandez, y como ese procedimiento viola en su persona la garantía que otorga el artículo 16 de la Constitución, lo reclama iniciando el recurso de amparo, y pide que suspendiéndose desde luego el acto reclamado, para evitar que Hernandez quite los terrenos y arroje de su casa á la quejosa, se le ampare en el goce de la garantía citada.

Con arreglo al artículo 59 de la ley de 20 de Enero de 1869, se suspendió desde luego la expedición del título de adjudicación á favor de Eugenio Hernandez; y en los términos y forma de la misma ley informó la Gefatura política, diciendo: que en 14 de Octubre último, Doña Petra Escobar solicitó la adjudicación de los terrenos que menciona, y en 26 del mismo, Eugenio Hernandez, hijo de aquella Señora, pidió á su

vez la adjudicación de los mismos terrenos, fundando su ocursio, en la calidad de poseedor que pretende tener, se remitieron esos ocursos al Ayuntamiento para que informase, y este dió su parecer en favor de Hernandez, por que en el cuadro de valores que formó la Corporacion Municipal con arreglo á la circular del Gobierno del Estado de 4 de Setiembre de 1872, aparece Hernandez y no la Escobar como poseedor de esos terrenos, y siguiendo la defatura ese parecer, acordó que los títulos de adjudicación se expidiesen á favor de Hernandez, dejando á salvo los derechos de la Sra. Escobar para que los dedujese ante el Juzgado de 1ª instancia, siempre que lo creyera conveniente.

El artículo 4º del decreto del Estado de México de 20 de Octubre de 1868, previno: que las autoridades municipales y políticas cuidaran bajo su mas estrecha responsabilidad, de que fuesen adjudicados los terrenos de comun repartimiento que no lo estuvieran, á los poseedores de ellos, conforme á la ley de 25 de Junio de 1856 y su reglamento de 30 de Julio del mismo año, y mas esplicita y terminante la circular del Gobierno general de 9 de Octubre de 1856, habia establecido ya, que todo terreno cuyo valor no pasara de doscientos pesos conforme á la base de la ley de 25 de Junio, se adjudicara sin gasto alguno á los arrendatarios; y que respecto de esos terrenos no se verificara ninguna adjudicación ni remate, sino en el caso de que los arrendatarios renunciaran expresamente sus derechos.

El Gobierno del Estado de Morelos, manifestó durante el año próximo pasado grande empeño por asegurar la propiedad no adjudicada hasta ahora, y entre otras disposiciones dictó la circular de 4 de Setiembre de 1872, que previno se ratificasen los valores de los terrenos que conservaran los ayuntamientos, obligando á los tenedores ó arrendatarios á presentar el valúo de esos terrenos, so pena de que á costa de los renuentes, los mandasen valuar los ayuntamientos, y mandó á los Gefes políticos que

respecto de los terrenos no adjudicados, procediesen de hecho á extender las escrituras correspondientes en favor de los poseedores, conforme á la circular de 9 de Octubre antes citada.

¿Del mero hecho de que en el cuadro de valores formado por el Ayuntamiento de esta Capital aparezca que Eugenio Hernandez es poseedor de los terrenos en cuestion, puede colegirse que los derechos de este sean incontrovertibles? En concepto del que suscribe, esa consecuencia no sería sostenible; pudo suceder, como en la mayor parte de los casos, que no presentado el valúo por los interesados, el Ayuntamiento mandara practicarlo, y confundidos en una misma familia Petra Escobar y Eugenio Hernandez, se designara como poseedor á este aun cuando lo fuere la Señora; y aun suponiendo que la misma Señora designara como poseedor á Hernandez, de nada valdria admitir la renuncia tácita de sus derechos, cuando la circular de 9 de Octubre exige que sea expresa tal renuncia y que se haga constar precisamente en la escritura, comprendiendo el punto de que el que la hace ha sido previamente impuesto de la ley, del reglamento y de las demas disposiciones dadas en beneficio suyo.

Por consiguiente, el dictámen del Ayuntamiento favorable al ocursio de Hernandez por solo que este aparecia como poseedor en el cuadro de valores, no es fundado. Pero del informe con justificación aparece comprobado, que anterior á la solicitud de este individuo habia otra de la Sra. Escobar; primero esta y despues la de Hernandez se mandaron á informe al Ayuntamiento, y ambas solicitudes se fundaban en los derechos de poseedor que á la vez pretendían tener esas dos personas. Habia pues una controversia de derechos particulares en pugna, asunto contencioso en que el C. Gefé político no podia decidir, y debió consignar la cuestion al Juez de 1ª instancia para que este resolviera siguiendo el procedimiento que establecen el artículo 30 de la ley de

25 de Junio de 1856 y el 24 del Reglamento de 30 de Julio del mismo año. Su acuerdo mandando estender la escritura en favor de Hernandez quedando á salvo los derechos de la Escobar, no dejaba expedito el juicio sobre preferencia de derechos á la adjudicacion; puesto que esta se habia verificado ya, y el único derecho que quedaba á salvo á la Señora, era el de pedir la declaracion de nulidad de la adjudicacion en favor de Hernandez, conforme á la circular de 9 de Octubre tantas veces repetida.

En otra ocasion, con motivo de un amparo promovido por el C. Andres Saturnino, contra la adjudicacion hecha por la Jefatura política de este Distrito al C. Marino Sanchez de un terreno de que era poseedor el primero y que estaba comprendido en la circular de 9 de Octubre, cuyas actuaciones obran en el archivo de este Juzgado, el que suscribe pidió la denegacion del amparo, por que no obstante la infraccion de esa circular y de que es indudable la nulidad de esa adjudicacion, no habia en mi concepto violacion de ninguna de las garantías constitucionales.

Fundaba esa opinion, en que el artículo 16 de la Constitucion que se invocaba entonces como ahora, prohíbe toda molestia sin mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento; y en el caso de que nos ocupamos, á la Jefatura política compete hacer las adjudicaciones, y las escrituras ya extendidas ó el acuerdo para que se otorguen, tienen el requisito de estar escritos, y expresan sus fundamentos cuya legalidad y subsistencia deberá tratarse en otro juicio y ante otra autoridad diversa del Juzgado de Distrito.

Pero la Suprema Corte de Justicia, en ejecutoria que en 25 de Marzo de 1872 pronunció sobre el mismo asunto, declaró: que no puede fundarse en causa legal un procedimiento contrario a la ley; y por consecuencia, amparó á Saturnino en el goce de la garantía expresada. En el presente re-

curso podría además considerarse violado el artículo 14 de la Constitucion, por que de hecho el C. Gefe político decidió en una cuestion de preferencia de derechos, materia contenciosa y exclusivamente propia de los tribunales; pero hay algunos puntos de la queja y algunas aseveraciones en el informe, que es necesario esclarecer y comprobar para el perfecto conocimiento de los hechos.

Efectivamente, es indispensable que se justifique por la quejosa, que como pretende ha sido la única poseedora del terreno en cuestion, para que si cabe pueda calificarse de ilegal el procedimiento reclamado, y será conveniente esclarecer si Eugenio Hernandez es hijo de Petra Escobar, pues sería factible que el padre de esa familia hubiera sido el poseedor del terreno en cuestion, y entonces los derechos de los que actualmente pretenden la adjudicacion, dependerian de los que tuvieran para suceder al antiguo poseedor.

Por lo que el Promotor fiscal pide: que con arreglo al artículo 10 de la ley de 20 de Enero de 1869, se mande abrir este negocio á prueba por un término comun que no exceda de ocho dias.

Cuernavaca. 2 de Diciembre de 1873.
—N. Medina.

Segundo pedimento del O. Promotor Fiscal.

C. Juez de Distrito.
El Promotor fiscal, en el recurso de amparo promovido por Petra Escobar contra el acuerdo de la Jefatura política de esta capital que mandó estender á favor de Eugenio Hernandez las escrituras de adjudicacion de cinco terrenos de que es poseedora la quejosa, su estado supuesto, ante V. dice: que suficientemente probado que con el acto reclamado se violan las garantías que otorgan los artículos 14 y 16 de la Constitucion, la justificacion de V. se ha

de servir declarar, que la Justicia [de la Union ampara y protege á Petra Escobar en el goce de esas garantías contra el acuerdo mencionado.

Abierto á prueba este juicio, de conformidad con el pedimento fiscal fecha 2 del actual, la quejosa presentó como testigos á los CC. Calixto Sanchez y Amado Rosales, quienes declararon conformes, que por haber ejercido el cargo de ayudantes municipales en el pueblo de Tlaltenango, saben y les consta que Marcelino Hernandez adquirió como vecino de aquel pueblo, los terrenos de comun repartimiento á que se refiere el acuerdo de la Gefatura, y acaecida su muerte, su viuda Petra Escobar continuó en posesion de esos terrenos y ha estado pagando las obenciones á que están sujetos los poseedores de tierras. Por vía de prueba tambien se presentó una copia certificada por el presidente y secretario del Ayuntamiento de esta capital, del testimonio de la informacion *ad perpetuam* rendida por la Escobar para acreditar que es y ha sido desde la muerte de su esposo, poseedora de los terrenos en cuestion; y que Eugenio Hernandez recogido y educado en calidad de huérfano por la misma señora, trabajó en esos terrenos por su mandato.

La declaracion de dos testigos mayores de toda escepcion, hace prueba plena y en tal virtud está suficientemente acreditado que Petra Escobar es poseedora de aquellos terrenos y por consiguiente la única que podia pedir la adjudicacion. De la informacion *ad perpetuam* aparece tambien que Eugenio Hernandez, no ha tenido jamas el ánimo de poseedor ni puede pretender derecho alguno para suceder al antiguo poseedor Marcelino Hernandez; y si trabajó en esos terrenos fué solo por la orden, en nombre y para provecho de la Escobar.

Peró apartando la cuestion de si el testimonio de la informacion *ad perpetuam* no ratificado puede hacer prueba en este juicio, la certification de la copia acredita, que fué presentada para apoyar ante la Ge-

fatura los derechos que la Escobar pretendia tener á la adjudicacion, y como contradice las constancias de los padrones del Ayuntamiento en que figura Hernandez como poseedor, no podian servir esas constancias para la adjudicacion en favor de Hernandez.

Ahora bien, el decreto del Estado de México de 20 de Octubre de 1868, previno que la adjudicacion de los terrenos de comun repartimiento se hiciera en favor de los poseedores, y la circular de 9 de Octubre de 1856 prohibió que los terrenos que valieran menos de doscientos pesos pudieran adjudicarse ni rematarse sino en el caso de que los arrendatarios renunciaran expresamente sus derechos; y como Petra Escobar en lugar de renunciarlos pidió la adjudicacion de los terrenos que posee, no es legal la causa en que la Gefatura política motivó el acuerdo reclamado que infiere inquestionable molestia en las posesiones de la quejosa, violándose así la garantía que otorga el artículo 16 de la Constitucion.

Ademas, por el informe con justificacion está comprobado tambien que se prefirió á Hernandez para adjudicarle los terrenos de que se trata, no obstante que Petra Escobar los había pedido antes solo porque aquel aparecia como poseedor en los padrones del Ayuntamiento, constancia que como hemos visto estaba contradicha con el testimonio de la informacion *ad perpetuam*; y como ese hecho equivale á decidir en una cuestion contenciosa é importa tanto como avocarse la Gefatura política el conocimiento de un juicio que correspondia al Juez de 1ª instancia y que debió seguirse conforme á los artículos 30 de la ley de 25 de Junio y 24 del Reglamento de 30 de Julio de 1856, se violó tambien la garantía que establece el artículo 14 del Pacto federal.

Por lo que, el Promotor pide se declare en los términos del principio, y se mande reponer con el correspondiente, el papel del sello 5º empleado en este juicio.

Cuernavaca, Diciembre 24 de 1873.—
N. Medina.

Son copias que certifico. Cuernavaca,
Enero 7 de 1874.—*José Anastasio Rego,*
secretario.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Cuernavaca, Enero 2 de 1874. Visto este juicio promovido por Doña Petra Escobar, vecina de Tlaltenango, solicitando amparo contra el Gefe político de esta capital, por haber adjudicado unos terrenos de que ella es poseedora en dicho pueblo, á Eugenio Hernandez que no los ha poseído con lo que dice haberse violado en su persona, las garantías que otorgan los artículos 14 y 16 del Código fundamental de la República. Visto el auto de este Juzgado, por el que se mandó suspender el otorgamiento de la escritura á favor de Hernandez; el informe de la autoridad responsable, en que manifiesta que aunque la Escobar denunció esos terrenos algunos días antes que Hernandez, remitidas sus solicitudes al Ayuntamiento de esta Ciudad, esta Corporación emitió su parecer á favor del segundo, por parecer como poseedor de los terrenos en cuestion en el cuadro de valores ó registro municipal y no Doña Petra Escobar. Visto el primer pedimento fiscal, por el que se recibe á prueba; la rendida por la quejosa, de la que aparece plenamente probado, que Eugenio Hernandez solo fué un huérfano de la casa de la Escobar y de su esposo, después de cuya muerte la viuda de Escobar continuó en la posesion de esos terrenos, pagando ella todas las obensiones que por ellos le correspondían, y Hernandez solo trabajaba en los mismos por mandato de su bienhechora y para provecho de esta, la que por caridad lo trataba como á hijo hasta casarlo últimamente. Que en cambio de estos beneficios, él quiso apoderarse de las

tierras y las denunció, prevalido de saber que su nombre y no el de su bienhechora constaba en el registro de los poseedores de terrenos del pueblo. Que para oponerse á este denuncia posterior al de la Escobar, presentó esta á la Gefatura testimonio fehaciente de las pruebas de su posesion, las que desechadas por el Ayuntamiento, dió esta oficina la preferencia al denuncia de Hernandez por el solo hecho de aparecer como poseedor en el cuadro de valores, sin someter esa cuestion á la decision judicial como debió haberlo hecho en cumplimiento del artículo 30 de la ley de 25 de Junio de 1856 y del artículo 24 reglamentario de la misma, de 30 de Julio del propio año. Considerando: que por lo expuesto y por no haber la Escobar renunciado nunca su posesion, la decision sobre preferencia de derechos era de la competencia de la autoridad judicial y no de la administrativa ó hacendaria, por lo que esta violó las garantías de los artículos constitucionales que invoca la quejosa: atento esto y lo pedido últimamente por el C. Promotor, con apoyo del artículo 19 fracción 1ª de la ley de 20 de Enero de 1869, se declara:

1º: Que la Justicia de la Union ampara y protege á Doña Petra Escobar, contra la adjudicacion otorgada por la Gefatura política de esta Capital á favor de Eugenio Hernandez, de los terrenos denunciados por éste el 26 de Octubre último.

2º: Hágase saber este fallo al C. Promotor. Notifíquese á Doña Petra Escobar previniéndole reponga con papel del sello tercero el del quinto invertido en este juicio. Sáquense copias del pedimento y de la sentencia para su publicacion por los periódicos, y remítanse los autos á la Suprema Corte de Justicia para su revision.

Así definitivamente juzgando lo proveyó y firmó el C. Lic. Mariano Sansalvador, Juez interino de Distrito del Estado de Morelos por ante mí de que doy fé.—*Lic. Mariano Sansalvador.*—*José A. Rego,* secretario

Es copia que certifico. Cuernavaca, Ene-

ro 7 de 1874.—*J. Anastasio Rego*, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Enero 20 de 1874. Visto el juicio de amparo promovido por Doña Petra Escobar, ante el Juzgado de Distrito de Morelos, contra los procedimientos del C. Gefe político de Cuernavaca, que mandó adjudicar al C. Eugenio Hernandez unos terrenos de la poseedora; visto el informe de la autoridad referida; lo pedido por el C. Promotor fiscal; las pruebas rendidas por la quejosa y todo lo demás que de autos consta y se tuvo presente, y por las propias consideraciones y fundamentos en que se apoya el Juez de Distrito de Morelos, se decretó: Que es de confirmarse y se confirma la sentencia que pronunció en 2 del presente mes, que declaró: Que la Justicia de la Union ampara y protege á Doña Petra Escobar, contra la adjudicacion otorgada por la Gefatura política de Cuernavaca á favor del C. Eugenio Hernandez.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese, archivándose á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron. *J. M. Iglesias. Pedro Ogazon. J. J. de la Garza. J. M. Lozano. J. Ortega. Ignacio Ramirez. Manuel de Castañeda y Nájera. S. Guzman. Luis Velasquez. J. García Ramirez. Enrique Landa*, secretario.

Es copia. México, Febrero 7 de 1874. *Lic. Emilio Ordaz*, oficial mayor interino.

AMPARO.

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Puebla de Zaragoza, por los CC. Ignacio Berra y Benito Bañuelos, contra el Gefe político de la ciudad de Tepeaca, por haberlos despojado de una parte del criadero de mármol situado en el cerro de Contla de que estaban en legítima posesion.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

Las razones legales en que descansa el alegato que antecede, son suficientes á persuadir de la justicia con que los quejosos han interpuesto el presente recurso. Tienen demostrado hasta la evidencia, que en la posesion que se les dió del criadero de mármol que denunciaron, y cuya denuncia les fué admitida con arreglo á derecho, estaban comprendidas las cuatrocientas varas de que fueron despojados despues por la Gefatura política de Tepeaca; y que esta, sin facultades para ello y sin autorizacion ni aun del Gobierno del Estado, llevó á efecto tal despojo, atropellando con ese acto las garantías que la Constitucion general otorga á todo hombre en sus artículos 16 y 27.

Este atropellamiento de parte de la autoridad responsable, que es cierto como se ve en autos, basta al Promotor para apoyar el amparo, haciendo suyos los fundamentos que hacen valer los interesados. Por eso pues, reproduciéndolos cual debe, pide á la acreditada justificacion de V. se sirva deferir á su solicitud, en vista de lo que dispone el artículo 19 de la ley de 20 de Enero de 1869, salvo su muy ilustrado parecer.

Puebla de Zaragoza, Octubre 15 de 1873.—E. Sanchez.